

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, el hecho de que la Administración del Principado de Asturias facilite a los diputados de la Junta General que lo soliciten “datos relativos a contratos y retribuciones del personal de aquella o de organismos y entidades del sector público autonómico, así como a facturas de empresas giradas a los mismos” sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados. A tal efecto, se incluyen en la solicitud los argumentos en los que se justifica por la consultante la licitud de la transmisión de información solicitada.

Como cuestión previa, debe indicarse que la cuestión planteada queda sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, encajando en el ámbito de aplicación descrito en su artículo 2.1, según el cual “la presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”, siendo datos de carácter personal, según establece el artículo 5.1 f) del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, “cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

La Ley Orgánica será así de aplicación a todo tratamiento de datos de carácter personal que no aparezca expresamente excluido de su ámbito de aplicación, en los supuestos contemplados en el artículo 2.2 de la propia Ley Orgánica. Así, se incluirán en dicho ámbito de aplicación los tratamientos de datos que se deriven de las relaciones de los particulares entre sí o con las Administraciones Públicas o en el ámbito de las mismas, sino también a supuestos como el presente.

En este punto, debe recordarse que si bien la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/1992, derogada por la vigente Ley Orgánica 15/1999 excluía de la aplicación de determinadas normas a los ficheros de las Cortes generales, dicha exclusión desapareció con la entrada en vigor de la nueva Ley, por lo que los ficheros de las Cortes Generales y, por extensión, los de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas se encuentran íntegramente sujetos a lo dispuesto en la normativa reguladora del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Dicho lo anterior, la transmisión por la Administración del Principado a la Junta General de los datos a los que se refiere la consulta constituye una cesión de datos de carácter personal en el sentido del artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, que define la misma como “Toda revelación de datos realizada a persona distinta del interesado”.

Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo 11 de la Ley, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario exigiendo, con carácter general, para que la cesión pueda tener lugar (salvo los supuestos exceptuados por el apartado segundo), el previo consentimiento del afectado, otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a que se destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

No obstante, no sería preciso el consentimiento de los interesados en los supuestos previstos en el apartado 2 del propio artículo 11, entre los que podría ser aplicable al supuesto contemplado lo dispuesto en su letra a), que permite la comunicación de los datos cuando la misma se encuentre habilitada por lo dispuesto en una norma con rango de Ley.

El artículo 23 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, dispone que “la Junta General del Principado de Asturias representa al pueblo asturiano, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos, orienta y controla la acción del Consejo de Gobierno y ejerce las restantes competencias que le confiere la Constitución, este Estatuto y demás normas del ordenamiento jurídico”

A su vez el artículo 26.3 del estatuto establece que “los miembros de la Junta General del Principado (...) tienen derecho a formular preguntas, interpelaciones y mociones en los términos en que el Reglamento determine.



También les asiste el derecho a obtener de las autoridades de la Comunidad Autónoma la información precisa para el desarrollo de sus funciones”, entre las que se encuentra la mencionada función de control de la acción del Consejo de Gobierno.

Por su parte, el Reglamento de la Junta General del Principado, de 18 de julio de 1997, detalla en su artículo 14 el modo en que procederá la obtención de la información a la que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de Autonomía, disponiendo lo siguiente:

*“1. Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, previo conocimiento del Portavoz de su Grupo, los Diputados tendrán derecho a obtener de los organismos e instituciones de la Administración de la Comunidad Autónoma los datos, informes o documentos que obren en poder de ésta.*

*En la solicitud de información podrán recabarse varios documentos siempre que quepa apreciar unidad temática sustancial entre los mismos.*

*2. La solicitud será dirigida a la Presidencia de la Cámara, que, en el plazo máximo de tres días, la oficiará al órgano de que se trate.*

*3. La Administración requerida, en plazo no superior a quince días a contar desde la recepción de la solicitud, deberá facilitar a la Presidencia del Parlamento los datos, informes o documentos requeridos o manifestar las razones fundadas en derecho que lo impidan. Este plazo podrá prorrogarse por seis días más a petición motivada de la Administración.*

*Cuando por el volumen de la documentación la Administración aduzca motivadamente que no puede remitir copia, facilitará la consulta de la misma en sus dependencias.*

*4. Recibida la información prevista en el número anterior, el Presidente de la Cámara dará traslado de la misma al Diputado interesado en plazo no superior a tres días.*

*5. Cuando, a juicio del Diputado, la Administración incumpliere o cumpliera defectuosamente con lo requerido, y sin perjuicio de cualquier otro recurso previsto, el Diputado podrá formular su queja ante la Mesa*



*de la Cámara, que adoptará las medidas que considere procedentes, dando cuenta de ellas al Diputado interesado.*

*6. Asimismo, los Diputados, a través del Presidente de la Cámara, podrán solicitar de la Administración periférica del Estado en la Comunidad Autónoma, documentación que obre en su poder y afecte al Principado de Asturias.”*

El análisis del valor de los Reglamentos de una Cámara legislativa, estatal o autonómica como norma habilitante suficiente para la aplicación del artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 ha sido analizado por esta Agencia en informe de 15 de septiembre de 2005, emitido en relación con una cuestión similar a la ahora analizada que había sido planteada por la Cámara legislativa de otra Comunidad Autónoma. En el mencionado informe se señalaba lo siguiente:

*“Avanzando en el análisis de la cuestión, respecto de la cesión o comunicación de datos, y siguiendo en este punto la referencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, rige (salvo en la cesión entre administraciones públicas para el desempeño de competencias similares) el principio de reserva de Ley, de tal modo que será necesario que, a falta de consentimiento, expreso o tácito cuando la Ley lo permita, del afectado, será necesaria la existencia de una habilitación legal que dé cobertura a la comunicación, pudiendo dicha habilitación incluso traer su causa de lo establecido en la propia Ley Orgánica 15/1999, tal y como sucede en los supuestos incluidos en los apartados b) a f) del artículo 11.2 de la misma.*

*Esta reserva de Ley debe ser interpretada, a la luz de lo indicado en la propia Sentencia citada (Fundamento Jurídico 11), en el sentido de que el legislador no podrá, sin más, efectuar una delegación genérica de los límites del derecho fundamental a la protección de datos en favor de otro de los poderes del Estado, por cuanto conforme al artículo 53. 1 de la Constitución Española cualquier restricción de un derecho fundamental esta sometida al principio de reserva de Ley y debe cumplir los principios de justificación y proporcionalidad, para resaltar la necesidad de que las limitaciones que puedan establecerse a dicho derecho han de ser medidas y, en todo caso, proporcionadas.*

*Así, y en aras a la consideración del Reglamento de la Cámara, en este caso autonómica, como una norma con rango de Ley que habilitara la*

*comunicación de los datos que solicita el Grupo Parlamentario, conviene analizar su naturaleza jurídica.*

*Con carácter general, la Constitución reconoce la potestad reglamentaria de las Cámaras en su artículo 72.1, y dispone que los Reglamentos sólo podrán ser aprobados o modificados por la mayoría absoluta de la Cámara correspondiente. La potestad autorreglamentaria implica, además de la atribución a las Cámaras de la facultad autonormativa, que la norma reglamentaria deriva directamente de la Constitución y que, por consiguiente, no tiene más límites que los establecidos por ella. Esta potestad supone también, que ninguna otra norma que no sean los Reglamentos de las Cámaras puede regular la organización y funcionamiento de estas, configurándose así en una “reserva de Reglamento”.*

*Todos estos elementos hacen considerar a los Reglamentos parlamentarios como una norma con ciertas peculiaridades dentro del ordenamiento porque son normas emanadas del poder legislativo y son elaboradas sin seguir el procedimiento legislativo habitual y por tanto, no pueden ser consideradas como una ley en sentido estricto general. Por otro lado, al ser normas que derivan directamente de la Constitución, como no existe norma alguna que se interponga entre la Constitución, el Tribunal Constitucional en su sentencia 118/1988, de 20 de junio, considera a los Reglamentos parlamentarios “asimilados a las leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley”.*

*En consecuencia, los Reglamentos de las Cámaras son normas directamente vinculadas y subordinadas a la Constitución y su posición en el sistema de fuentes no puede determinarse en términos de jerarquía, sino en términos de competencia, esto es, partiendo de la reserva constitucionalmente prevista a favor de los Reglamentos para que estos, y no otra norma cualquiera, ordenen la vida interna de las Cámaras. La fuerza de Ley atribuida por el Tribunal Constitucional a los Reglamentos parlamentarios, queda también reflejada en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conforme a la cual cabe recurso de inconstitucionalidad contra ellos.*

*Por ello, es posible concluir que parece existir cobertura legal a la cesión planteada (...), no correspondiendo a esta Agencia Española de Protección de Datos proceder a la interpretación de dicho precepto a efectos de valorar la proporcionalidad de los datos que deban ser*

*comunicados, siendo la Mesa de la Asamblea la que deba pronunciarse sobre este aspecto.*

*No obstante, de conformidad con los principios de proporcionalidad y justificación antes enunciados, que deben en todo caso presidir tal cesión de datos, debe claramente indicarse en dicha comunicación que los mismos únicamente pueden ser utilizados para la finalidad que justifica su cesión, y que el tratamiento de los mismos deberá en todo momento ajustarse a las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999.”*

A la vista de todo ello, siempre que la solicitud de información cumpla los requisitos establecidos en el artículo 14 del Reglamento de la Junta General del principado de Asturias, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26.3 del Estatuto de Autonomía del Principado y no exista un uso de los datos que exceda de las finalidades relacionadas con las funciones de control atribuidas a la Junta general por las mencionada normas, la cesión a la que se refiere la consulta se encuentra plenamente amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.